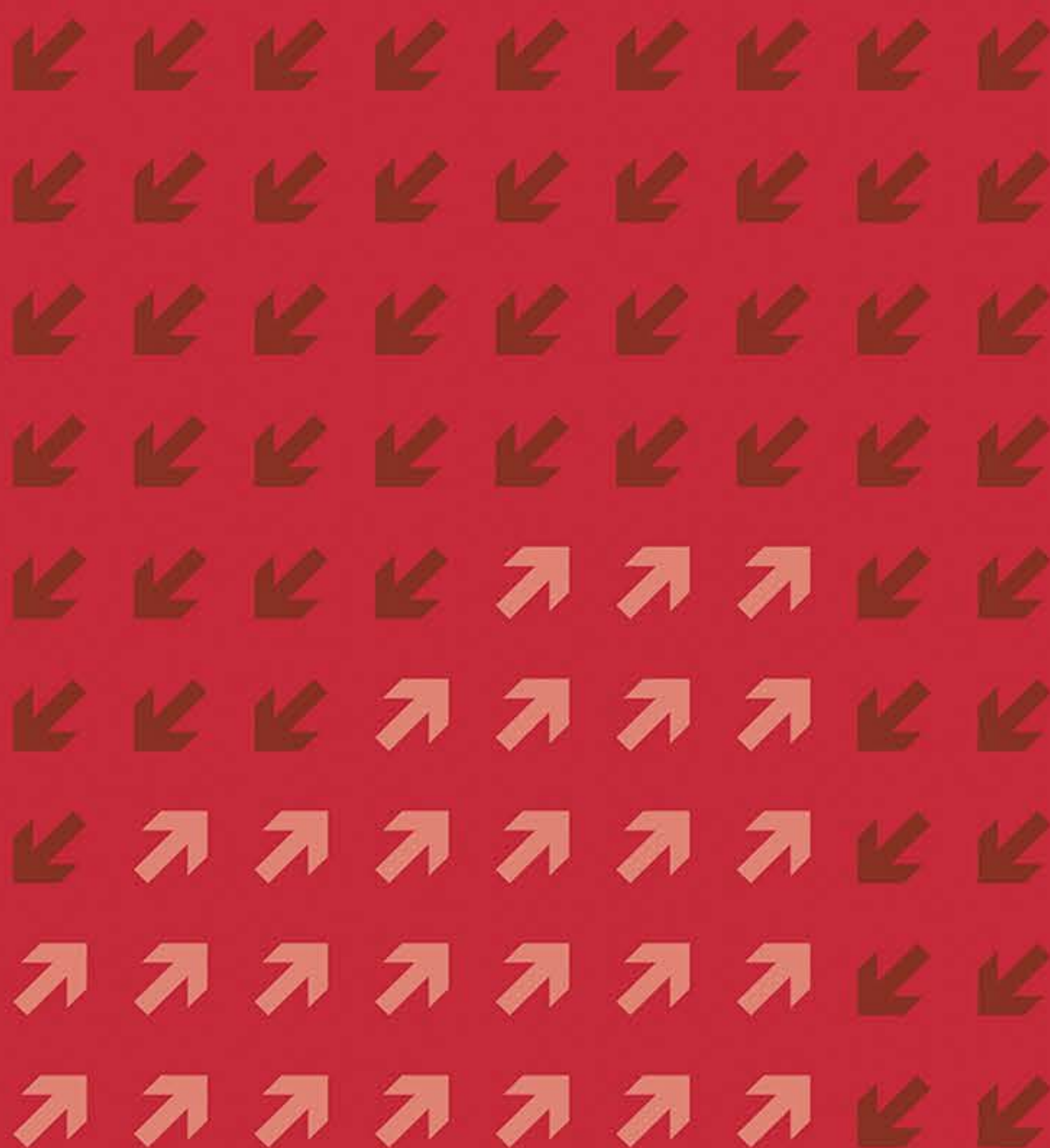




PROGRAMA DE LUCHA *para Aragón*



**LA OPOSICIÓN
OBRERA**



Introducción

¿Alguna vez has pensado que, gobierne quien gobierne en Aragón, tu vida no mejora? **Cambian los nombres, los colores y los discursos, pero no las condiciones en las que trabajamos, vivimos y sobrevivimos la mayoría social.** Esa sensación no es casual: responde a un consenso profundo que comparten todos los partidos del arco parlamentario. PP, PSOE, VOX y el resto de fuerzas con representación institucional aceptan el mismo marco político y económico: el capitalismo, la subordinación a los mandatos de la Unión Europea y la prioridad absoluta de la rentabilidad empresarial frente a las necesidades de la clase trabajadora. Sus diferencias no son de fondo, sino de gestión. Administran el mismo orden.

La convocatoria anticipada de elecciones impulsada por el PP de Azcón no tiene nada que ver con una urgencia social en Aragón. No responde a la precariedad laboral, al encarecimiento de la vivienda, al deterioro de la sanidad pública, al abandono del Aragón rural ni al empobrecimiento de amplias capas de la población. Responde, exclusivamente, a cálculos políticos: recomponer equilibrios institucionales, resolver el bloqueo con VOX y reforzar su papel como gestor fiable de los intereses empresariales. VOX, por su parte, intenta capitalizar el malestar señalando enemigos falsos y desviando la rabia social, mientras protege intactos los intereses del capital. El PSOE, desgastado por años de gobierno y promesas incumplidas, vuelve a **refugiarse en la lógica del mal menor**, presentándose como el único dique frente a la derecha y la extrema derecha. Una lógica que no frena el retroceso, sino que lo normaliza y lo hace avanzar.

A la izquierda del PSOE el panorama no es mejor. Asis-

timos, una vez más, a la fragmentación permanente, a alianzas tácticas sin horizonte y a enfrentamientos estériles cuyo objetivo real no es organizar a la clase trabajadora, sino **asegurar presencia institucional, cuotas de poder o simple supervivencia electoral**. Se discute sobre siglas, listas y pactos mientras se abandona lo esencial: cómo reconstruir una oposición real al estado actual de las cosas, cómo fortalecer la organización obrera y popular antes, durante y después de las elecciones. Para ese mundo, la política es una carrera por escaños; para el PCTE, la política es un proceso sostenido de oposición frente a ellos. De organización, conciencia y lucha, gobierne quien gobierne.

Por eso **este texto no es un programa electoral al uso**. No es un catálogo de promesas ni una carta dirigida al próximo Gobierno de Aragón. Es un programa de lucha. Una herramienta al servicio de todas aquellas personas que no se resignan a que su vida siga empeorando bajo distintos gestores. Sabemos que muchas de las medidas que aquí planteamos no dependen de la voluntad ni de las competencias de un gobierno autonómico. Y precisamente por eso las planteamos: porque no están pensadas para ser concedidas desde arriba, sino para ser conquistadas desde abajo mediante organización, conflicto y movilización.

Las elecciones, por sí solas, no cambian las relaciones de poder. **El día después de votar, los empresarios seguirán siendo empresarios, los caseros seguirán siendo caseros y la precariedad seguirá marcando la vida de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en Aragón**. La vivienda seguirá tratándose como un negocio, la sanidad y la educación continuarán sometidas a recortes y privatizaciones encubiertas, el Aragón rural seguirá vaciándose y el mercado laboral seguirá produciendo temporalidad, inseguridad y sa-

larios insuficientes. Por eso nuestra política, la de los trabajadores y trabajadoras, no empieza ni termina en una campaña electoral.

Este programa fija nuestras prioridades para los próximos años, con independencia de quién ocupe el Edificio Pignatelli. Prioridades claras en torno a las cuales organizar la lucha obrera y popular en Aragón: las condiciones laborales de la mayoría trabajadora; la vivienda y los espacios de vida; la sanidad pública; la educación y la realidad del Aragón vaciado. No como cuestiones separadas, sino como frentes conectados de un mismo conflicto social entre el capital y el trabajo.

Frente al bloque de partidos de los empresarios, el PCTE levanta *La oposición obrera*. No pedimos cheques en blanco ni prometemos soluciones mágicas. Llamamos a dejar de delegar la defensa de nuestras condiciones de vida en quienes solo saben —y solo están dispuestos— a gestionar su deterioro. Lo que se decide en estas elecciones no es quién nos va a salvar, sino si empezamos a **reconstruir una oposición organizada**, consciente y combativa al conjunto del sistema que nos explota. Y en ese camino, sin ambigüedades, estamos nosotras y nosotros, los comunistas.

Nuestros barrios, nuestra vivienda

La vivienda es hoy uno de los principales mecanismos de empobrecimiento de la clase trabajadora en Aragón. No es una anomalía ni una mala racha: es el resultado directo de décadas de políticas que han convertido el derecho a vivir bajo un

techo en un negocio. Cada campaña electoral lo confirma. Anuncios apresurados, actos propagandísticos y promesas que no alteran la realidad cotidiana de nuestros barrios.

El reciente anuncio del inicio de trámites para un centro de salud en Arcosur es ilustrativo, pero no excepcional. Arcosur es un barrio levantado al calor de la burbuja inmobiliaria, con graves carencias de servicios, equipamientos y conexiones, que solo recibe atención institucional cuando conviene electoralmente. Su situación pone de manifiesto una lógica general: **barrios planificados sin vida, infraestructuras que llegan tarde y mal, y políticas públicas supeditadas a los ritmos de la especulación.**

En los barrios consolidados de Zaragoza, como El Arrabal, San José, Delicias, La Jota, Torrero o Las Fuentes, el valor de los pisos no deja de crecer, expulsando a la población trabajadora, dificultando la emancipación juvenil y encareciendo el alquiler hasta niveles insostenibles. Mientras tanto, los programas municipales y autonómicos de vivienda se muestran claramente insuficientes y revelan su verdadera prioridad: la cesión de suelo al capital inmobiliario para la especulación antes que la ampliación de un parque de vivienda realmente accesible.

El resultado es una **ciudad cada vez más desigual**. Un Centro Urbano orientado al turismo, al consumo y a la inversión, del que la clase trabajadora es progresivamente expulsada, y barrios concebidos únicamente como espacios dormitorio, infradotados de servicios, mal conectados y sin lugares de socialización. La planificación urbana no responde a las necesidades de quienes viven y trabajan en la ciudad, sino a los intereses de propietarios, constructoras y fondos de inversión.

Fuera de las capitales de provincia, en amplias zonas del

territorio aragonés, el problema adopta otra forma igual de grave: la escasez de vivienda accesible, especialmente en alquiler, que dificulta aún más la permanencia o la llegada de población, incluso la necesaria para sostener los servicios básicos. Esta carencia no responde a una falta física de suelo o a la necesidad de impulsar dinámicas especulativas, sino a un modelo económico desordenado que no planifica el territorio en función de las necesidades sociales, sino del beneficio de unos pocos. El llamado «*Aragón vaciado*» no es fruto del azar ni de una ausencia puntual de construcción, sino la **consecuencia de un sistema económico caótico basado en el lucro de unos pocos y no en la satisfacción de los intereses de la mayoría.**

Frente a este fracaso evidente, el debate político dominante oscila entre dos falsas soluciones. Por un lado, la confianza ciega en el mercado que proponen partidos como el PP, que solo garantiza más especulación. Por otro, la intervención limitada de la socialdemocracia como PSOE y SUMAR, que en la práctica se reduce a ayudas indirectas, bonificaciones y subvenciones con fuertes trabas burocráticas, incapaces de garantizar el acceso a la vivienda y que, en muchos casos, terminan trasladándose a los precios, reforzando el negocio inmobiliario. **Ninguna de estas opciones cuestiona el poder de bancos, grandes propietarios y fondos buitres.**

Fuera de las capitales de provincia, en amplias zonas del territorio aragonés, el problema adopta otra forma igual de grave: la falta de construcción y especialmente de vivienda en alquiler, que todavía dificulta más la permanencia o la llegada de población, inclusive la necesaria para trabajar en los servicios básicos. El «*Aragón vaciado*» no es fruto del azar, sino la consecuencia de un sistema económico caótico basado en el lucro de unos pocos y no en la satisfacción de los intereses

de la mayoría.

Mientras las propuestas de los grandes partidos alternan entre ayudas paliativas insuficientes, y la confianza ciega en las lógicas del capital, la propuesta comunista parte de una idea sencilla que queremos situar en el centro de la lucha por la vivienda: esta no puede tratarse como mercancía, sino como una necesidad social. Lo cual nos sitúa ante una serie de **propuestas inmediatas por las que luchar fortaleciendo el movimiento vecinal y de vivienda** con orientaciones clasistas:

- 1. Conformación de una bolsa de viviendas públicas** en régimen de alquiler, con precios fijos y regulados por el Estado.
- 2. Expropiación de las viviendas actualmente en manos de los bancos y fondos buitres.**
- 3. Paralización de los desahucios**, cortes de luz, agua, gas por parte de bancos y compañías eléctricas.
- 4. Planificación y desarrollo de sistemas de transporte público y colectivo** que garantice las conexiones entre los pueblos, los barrios, los polígonos industriales, las zonas comerciales y los centros de estudio.
- 5. Elevación de los salarios por encima del IPC.**
- 6. Fijación de precios máximos para los productos básicos** sin asunción de la diferencia por la Administración, lo cual supondría una nueva vía para destinar dinero público al beneficio privado.

Nuestros barrios y nuestros pueblos no necesitan más propaganda electoral ni más parches. Necesitan organización, lucha y una política que ponga la vida en el centro. Esa es la

tarea que asumimos, *gobierne quien gobierne*.

Nuestra salud no es un negocio

La sanidad pública aragonesa atraviesa una **situación crítica**. Listas de espera interminables, centros saturados y una falta estructural de profesionales definen hoy un sistema que ya no garantiza una atención digna a amplias capas de la población. Esta situación se agrava especialmente en el medio rural, donde la escasez de personal hace imposible sostener siquiera una atención primaria básica y continuada.

Lejos de revertir esta realidad, los distintos gobiernos autonómicos han profundizado en una misma dirección. Ni bajo los ejecutivos del PSOE ni durante el reciente gobierno PP-VOX se han recuperado los servicios, centros y especialidades perdidos tras los recortes iniciados a partir de 2008. Lo que sí ha crecido de forma sostenida es la sanidad privada, alimentada por dinero público y presentada como una supuesta solución a la saturación del sistema.

La concertación público-privada se ha consolidado como un pilar estructural del modelo sanitario aragonés. En los últimos cuatro años se han destinado **al menos 35 millones de euros de dinero público a derivar operaciones quirúrgicas a la sanidad privada** como respuesta a las listas de espera en la pública. Hoy, en torno al 30 % de las intervenciones quirúrgicas en Aragón se realizan ya en centros privados, lo que supone un reconocimiento explícito de la incapacidad —deliberadamente mantenida— del sistema público para absorber

la demanda, y de la decisión política de financiar el negocio privado antes que reforzar lo público.

Esta deriva tiene consecuencias directas sobre la población trabajadora. Entre 2019 y 2024, los seguros sanitarios privados han crecido un 20 %, hasta alcanzar al 23,5 % de la población aragonesa. El seguro privado ha dejado de ser una opción marginal: **para muchas familias se ha convertido en una imposición**, una salida forzada ante la imposibilidad de acceder a pruebas, consultas o intervenciones en plazos razonables dentro de la sanidad pública. No se trata de libertad de elección, sino de expulsión desde lo público hacia lo privado.

En esta misma lógica se inscribe la apertura, en 2025, del primer hospital universitario privado de Aragón, el Quirón Salud Zaragoza, vinculado a la Universidad San Jorge, también privada. Esta operación no solo ha supuesto desviar a la sanidad privada la creación de 149 nuevas camas hospitalarias, sino que **normaliza que la formación médica quede subordinada a intereses empresariales**. Hoy, el 34 % de los hospitales de Aragón son privados y el 18 % de las camas están en manos de entidades privadas, con grandes grupos como Quirón —que emplea a 745 trabajadores solo en la ciudad de Zaragoza— consolidando su posición dominante gracias al respaldo indirecto de las políticas públicas.

Este crecimiento no responde a las necesidades del territorio, sino a los cálculos de rentabilidad del capital sanitario. En ningún pueblo del Aragón rural existe un solo hospital privado, porque allí no salen las cuentas del negocio. Mientras tanto, amplias zonas del territorio sufren una falta crónica de profesionales, cierres encubiertos y una degradación constante de la atención sanitaria.

La propuesta inmediata del PCTE ante esta situación pasa

por **fortalecer y articular el tejido organizativo de los trabajadores del sector y los vecinos de los barrios y pueblos**, abanderando reivindicaciones de clase que no se empañen con intereses empresariales y corporativos. Proponemos que las demandas que guíen la lucha en el próximo ciclo político sean:

- 1. Eliminación de todo tipo de conciertos sanitarios** y fin del trasvase de dinero público a la sanidad privada.
- 2. Sistema de salud público y único para todo el país**, con el máximo de coberturas en todos los territorios de Aragón, urbanos y rurales.
- 3. Incremento y estabilización de las plantillas sanitarias y reorganización de la atención**, abriendo los turnos necesarios para optimizar y utilizar al 100% las infraestructuras sanitarias.
- 4. Dedicación exclusiva del personal sanitario a la sanidad pública** y mejora de las condiciones laborales del personal sanitario
- 5. Reversión de las externalizaciones y recuperación de la gestión pública directa** en hospitales, centros de salud o cualquier otro tipo de instalación sanitaria del Sistema Nacional de Salud

Nuestra educación no es un mercado

La educación pública en Aragón atraviesa una **ofensiva priva-**

tizadora que amenaza con transformar un derecho básico en un servicio subordinado a intereses empresariales. Lejos de reforzar el sistema público y atender a sus múltiples dificultades, el Gobierno de Aragón del PP ha anunciado su intención de ampliar de forma significativa la concertación educativa a partir de 2026, afectando al Bachillerato y a la educación de 0 a 3 años, decenas de unidades susceptibles de ser concertadas en todo el territorio.

Esta deriva no es nueva ni aislada. En los últimos años se ha profundizado también en la concertación y privatización de la Formación Profesional. Mientras los centros públicos de FP continúan infrafinanciados, con falta de recursos y plantillas insuficientes, el Departamento de Educación autoriza a cada vez más empresas privadas a ofertar los ciclos formativos más demandados. El resultado es una **FP crecientemente orientada a funcionar como un sistema de capacitación de mano de obra barata y flexible**, directamente subordinada a las necesidades empresariales, que amplían su control sobre el tiempo de estudio y trabajo del alumnado.

Esta orientación se ve reforzada por las políticas educativas estatales de los últimos años, que han consolidado un modelo en el que la Formación Profesional se concibe menos como un espacio educativo integral y más como una herramienta al servicio del mercado laboral. **La educación deja así de pensarse como un derecho y un proceso de desarrollo personal y colectivo**, para convertirse en un engranaje más de la precarización de la mano de obra.

Ante las movilizaciones y la respuesta sindical que estas políticas han suscitado, el Gobierno de Aragón ha respondido con propaganda sobre la supuesta creación de plazas educativas. Un discurso que oculta deliberadamente que todas esas plazas podrían haberse creado en el sistema público,

incrementando aulas, plantillas y recursos, en lugar de transferir fondos y alumnado a manos privadas.

Otro de los focos del malestar en la comunidad educativa es el **sistema de acceso a la función pública docente**. Lejos de garantizar estabilidad laboral y calidad educativa, se ha convertido en un mecanismo que dificulta el acceso a unas plazas claramente insuficientes. **La arbitrariedad y la falta de garantías convierten los procesos selectivos en una carrera extenuante** que cronifica la precariedad del profesorado y deteriora las condiciones de enseñanza.

Las consecuencias son visibles en los centros públicos: ratios elevadas —22 alumnos en Primaria, hasta 25 y 28 en ESO y Bachillerato—, sobrecarga de trabajo y enormes dificultades para atender adecuadamente al alumnado. Sin los recursos humanos y materiales necesarios, incluso las abstractas medidas de atención contempladas en la legislación vigente quedan en papel mojado. De no frenar esta tendencia, avanzamos hacia un modelo educativo segregado, con centros de distinto estatus social y con comunidades educativas desbordadas por la falta de medios.

Frente a esta situación, **la defensa de la educación pública pasa por recuperar la movilización y la organización de trabajadores y familias**, y por disputar colectivamente el control del proceso educativo. No se trata de parches ni de reformas cosméticas, sino de confrontar un modelo que subordina la educación a la rentabilidad y al mercado. Para ello, las propuestas que planteamos como horizonte inmediato de lucha son:

- 1. Paralización y supresión de todos los planes de concertación educativa en marcha.** Reversión del resto de conciertos educativos y nacionalización de todos los cen-

tros en manos privadas, garantizando la absorción de las plantillas en el sistema público.

- 2. Desarrollo de un sistema educativo público, de calidad, a lo largo de toda la vida,** al servicio del desarrollo integral de las personas y no a las necesidades del mercado.
- 3. Sustitución del actual sistema de acceso a la función pública docente por un modelo que garantice tanto selección cualificada como la cobertura de las necesidades reales del estudiantado y las familias,** establezca a los trabajadores y elimine la arbitrariedad.
- 4. Bajada generalizada de las ratios y aumento de los recursos humanos y apoyos materiales** necesarios para atender adecuadamente las necesidades del alumnado.
- 5. Desarrollo de la gestión pública directa de los servicios actualmente privatizados o externalizados** en los centros educativos, como limpieza y comedores.
- 6. Recuperación y desarrollo de las estructuras democráticas de control y decisión en los centros educativos:** Consejos Escolares con capacidad real de decisión, y elección de los equipos directivos mediante votación directa de la comunidad educativa.

Nuestro trabajo y nuestra lucha. Contra su explotación y su gestión.

El mercado laboral en Aragón se sostiene sobre una precariedad estructural que afecta a amplias capas de la clase traba-

jadora. **Alta temporalidad, salarios insuficientes, jornadas irregulares y una fragmentación creciente** definen una realidad que no se corrige con buenas cifras macroeconómicas ni con récords de afiliación. Detrás de esos datos se esconde un día a día marcado por la inestabilidad, la rotación constante y la pérdida continuada de poder adquisitivo.

Las políticas laborales impulsadas en los últimos años por los gobiernos del PSOE, tanto en coalición con Unidas Podemos como con SUMAR, no han revertido esta situación. Al contrario: han asumido plenamente el marco de las necesidades actuales del capitalismo y han impuesto una política de pacto social para contener la lucha sindical, limitándose a gestionar la precariedad. Bajo el discurso del «escudo social» y del diálogo social, se han desplegado mecanismos de flexibilidad interna y externa que subordinan todavía más el trabajo a las necesidades empresariales, mientras se transferían miles de millones de euros de dinero público a las empresas mediante subvenciones, ayudas indirectas y rescates encubiertos.

En Aragón, esta dinámica se expresa con especial crudeza en sectores como **la logística, la industria auxiliar presente en muchos núcleos medianos de población supeditados al eje industrial de la capital, la hostelería y el comercio**. Sectores donde se concentran jornadas irregulares, salarios bajos y temporalidad extrema, en buena parte a través del uso cada vez más generalizado de las ETT.

El demostrativo fracaso en el Congreso del proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, que se presentaba como una gran conquista histórica, mostró que no basta con anuncios grandilocuentes ni con cálculos de alianzas. La medida no surgió de una lucha impulsada por el movimiento obrero, sino como una iniciativa parlamentaria desligada de la

organización y la lucha de los trabajadores. Y lo que es todavía más importante, el contenido de la propuesta de reforma no cuestionaba el control empresarial sobre el tiempo de trabajo: planteaba una reducción limitada y consolidaba el cómputo anual de la jornada, favoreciendo la flexibilidad al servicio de la empresa. **Cuando fallaron los equilibrios parlamentarios, la propuesta se hundió sin que nadie defendiera en la calle lo que nunca se había construido como una reivindicación de clase.**

La historia del movimiento obrero demuestra que las conquistas reales, como fue la jornada de ocho horas, no fueron fruto del consenso ni del diálogo social, sino de la **confrontación abierta con los intereses del capital** y de la organización independiente de la clase trabajadora. Allí donde el tiempo de vida se subordina a la rentabilidad del capital, no hay margen para soluciones que no pasen por la lucha de los trabajadores.

Por eso, frente a la gestión «más amable» de la precariedad, nuestra apuesta es **fortalecer el tejido obrero y sindical, en Aragón y en el conjunto del país, con una orientación clara de clase.** No para rogar mejoras y que otros, supuestamente representándonos, tengan a bien defenderlas en el Congreso, y nuestras reivindicaciones queden a merced de los juegos parlamentarios; sino para imponerlas nosotros y nosotras mismas. En el marco actual, impulsaremos la lucha contra la precariedad laboral priorizando las siguientes reivindicaciones:

- 1. Prohibición de la subcontratación y externalización de actividades estructurales en empresas y servicios públicos.**
- 2. Eliminación de las fórmulas de contratación tempo-**

ral injustificada y otras herramientas de flexibilidad al servicio de la empresa, como los ERTE sufragados con dinero público.

3. Subida de salarios por encima del IPC, garantizando la recuperación del poder adquisitivo.

4. Reducción de la jornada laboral a 30h semanales, sin merma salarial.

Nuestro territorio, no su rentabilidad

La **despoblación rural no es un fenómeno accidental ni inevitable**. Es el resultado histórico de la forma en que el capitalismo organiza la producción, el trabajo y el espacio. Aragón es una región que sufre éxodo rural y despoblación desde hace décadas, lo cual se debe a la destrucción sistemática de las condiciones materiales de vida en el medio rural y a la concentración de la actividad productiva allí donde el capital puede maximizar su rentabilidad.

El desarrollo capitalista ha generado al mismo tiempo hacinamiento urbano y vaciamiento rural. **Mientras Zaragoza se hacina y se disparan los alquileres, pueblos enteros pierden población, servicios y empleo**. Esta contradicción no es una anomalía del sistema, sino una de sus expresiones más claras. Los distintos gobiernos se han limitado a gestionarla sin cuestionar sus causas, organizando el territorio no para garantizar una vida digna, sino para sostener la acumulación de capital.

Las respuestas institucionales a la despoblación han sido parciales y funcionales a estos intereses. Lejos de revertir el

vaciamiento, muchas de las políticas aplicadas lo han profundizado. Una de las principales «recetas» ha sido la promoción del **turismo rural como motor económico**. Este modelo transforma los pueblos en espacios de consumo estacional, pensados para el visitante y no para quienes viven y trabajan en ellos. El empleo que genera es temporal, mal remunerado y altamente precario, concentrado en hostelería y servicios, sin capacidad real para fijar población ni garantizar condiciones de vida estables.

Además, el auge del alojamiento turístico reduce aún más la ya escasa vivienda disponible para residentes, encarece los precios y expulsa a quienes necesitan vivir en el territorio de forma permanente. Esta dinámica es especialmente visible en zonas como el Pirineo, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural incluso para quienes trabajan en los servicios básicos.

Otra de las grandes apuestas que se nos vende para el medio rural es la **instalación masiva de parques eólicos y fotovoltaicos**, presentados como soluciones contra la despoblación. La realidad es muy distinta: la energía se extrae de zonas ya despobladas para su consumo y acumulación en otros espacios, sin una reinversión significativa que contribuya a mejorar las condiciones materiales del territorio. Se ocupan tierras, se transforman paisajes y se imponen proyectos decididos desde arriba, mientras en los pueblos apenas queda empleo, inversión o servicios. Es un modelo que necesita muy poca mano de obra y que no crea economía local ni fija población. Así, una vez más, las zonas rurales cargan con los costes, mientras la riqueza se concentra en otros lugares. Lejos de revitalizar el territorio, este modelo profundiza la dependencia y acelera el vaciamiento de nuestros pueblos.

Mientras la producción y el territorio estén organizados

en función del beneficio privado, seguiremos viendo este modelo. **Enfrentar la población exige romper con las falsas soluciones del capital y situar en el centro una planificación económica al servicio de las necesidades populares.** Esto solo puede lograrse fortaleciendo nuestra organización. En este marco, la lucha por un Aragón vivo pasa por defender las siguientes propuestas:

- 1. Garantía de empleo público y estable en el medio rural** ligado a sanidad, educación, cuidados, transporte, mantenimiento e infraestructuras.
- 2. Restablecimiento y ampliación de servicios públicos en pueblos y comarcas**, como condición básica para vivir y trabajar en el territorio.
- 3. Rechazo del turismo rural como eje exclusivo de desarrollo económico** y regulación estricta del sector turístico para evitar la temporalidad extrema y la vulnerabilidad laboral.
- 4. Paralización de los macroproyectos eólicos y fotovoltaicos** impulsados sin garantías medioambientales y estudio del impacto ecológico.
- 5. Garantía de transporte público regular, accesible y de calidad** entre pueblos, comarcas y ciudades.

Conclusiones

Nada de lo que ocurre hoy en Aragón es fruto del azar. La precariedad laboral, el encarecimiento de la vivienda, el deterioro de la sanidad y la educación públicas y el vaciamiento del territorio responden a una misma lógica: **un sistema económi-**

co que organiza la vida en función del beneficio de unos pocos y no de las necesidades de la mayoría. Cambian los gobiernos, las siglas y los discursos, pero esta lógica permanece intacta.

Frente al relato de la resignación, Aragón tiene una historia de lucha obrera y popular que demuestra que nada se ha conquistado sin organización y conflicto. Los derechos laborales, los servicios públicos y las condiciones de vida dignas no fueron concesiones, sino el **resultado de la movilización colectiva de la clase trabajadora.**

Lo que está en juego en estas elecciones no es solo un reparto de escaños, sino si empezamos a reconstruir una oposición organizada y consciente frente a este modelo. No se trata de esperar soluciones desde arriba, sino de reconocernos como parte de una misma clase con intereses comunes y de volver a confiar en nuestra propia fuerza.

El PCTE no promete gestionar mejor un sistema injusto. Llama a organizarse con independencia de los partidos del capital y a levantar una oposición que no se conforme con administrar el deterioro de nuestras condiciones de vida.

Frente a su consenso y su forma de gobernar, la tarea es clara: organización, lucha y oposición de clase. No para sostener un Aragón al servicio del beneficio privado, sino para empezar a construir un Aragón al servicio de quienes lo trabajan y lo sostienen cada día.

Una oposición real. **Una oposición obrera.**

